

EL HAITÍ DE KOFI ANNAN¹

En la vasta barriada de chabolas de hojalata de Cité Soleil, donde vive un cuarto de millón de personas, todas las escuelas y el único hospital están cerrados. Vehículos acorazados blancos de la ONU patrullan el perímetro, con media docena de cascos azules asomándose desde la torreta, mientras por las calles suenan los disparos de armas automáticas. Son las unidades enmascaradas de la Police Nationale d'Haïti, apoyadas por irregulares fuertemente armados del ejército haitiano, oficialmente disuelto, las que realizan brutales incursiones contra los barrios obreros; pero la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti –MINUSTAH– las respalda, bloqueando las salidas mientras la PNH se extiende por la zona y comienza el tiroteo. En los distritos pobres de Puerto Príncipe –La Saline, Bel Air–, una investigación sobre los derechos humanos realizada en 2004 informó de que tales incursiones dejan «cadáveres en las calles casi a diario, incluidos mujeres, niños y viandantes inocentes, mientras que las fuerzas de la ONU actúan ostensiblemente como protección, más que como freno, de la violencia oficial». Un oficial de la policía quebequesa asignado a las fuerzas de la ONU se quejaba de que lo único que había hecho desde que llegó a la isla era «participar en una guerra de guerrillas cotidiana».

¡Bienvenidos al Haití de Kofi Annan! Hace ya dos años que la fuerza multinacional respaldada por la ONU y encabezada por Estados Unidos, Francia y Canadá derrocó al gobierno constitucionalmente elegido de la coalición Lavalas, presidido por Jean-Bertrand Aristide. La argumentación en favor de una intervención militar se basaba en la perspectiva de una posible «catástrofe humanitaria» a punto de estallar, y el mandato rápidamente aprobado por la ONU, mientras marines y legionarios irrumpían en el Palacio Nacional, era «promover la protección de los derechos humanos». Francia, la antigua metrópoli colonial de Haití, fue la principal fuerza impulsora de la invasión. El gobierno de Bush, estancado en Iraq, quemado por el fracaso del golpe contra Chávez en 2002, y viendo cómo se acercaban las elecciones de 2004, no deseaba otro compromiso militar.

¹ Michael DEIBERT, *Notes from the Last Testament. The Struggle for Haïti*, Nueva York, Seven Stories Press, 2005.

Chirac y Villepin, deseosos de congraciarse con él tras las tiranteces suscitadas por la operación Libertad Iraquí, ofrecieron un paquete a la medida: respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU para una fuerza de invasión multilateral con la garantía de la retirada en tres meses, para ser sustituida por una misión de la ONU más amplia. Los consejeros de Chirac, buscando una fórmula con la que eludir la pretensión de Aristide de que París devolviera los millones que había extorsionado en otro tiempo a Haití, le sugirieron que el bicentenario de la independencia de la mitad de la isla en 1804 le ofrecía a Francia la oportunidad de «librarse del peso que la servidumbre impone al amo». Esta carga fue compartida animosamente por el Brasil de Lula, el Chile de Lagos, la Argentina de Kirchner y otros, cuando a partir de junio de 2004 sustituyeron a la fuerza inicial franco-canadiense-estadounidense a fin de contribuir al «proceso político pacífico y constitucional».

De hecho, como argumentaba Peter Hallward en *NLR* 27, lo que se había venido desarrollando en Haití en las semanas anteriores a la invasión «era menos “una crisis de los derechos humanos” que una guerra de baja intensidad entre elementos de las antiguas fuerzas armadas y el gobierno elegido que las había disuelto». De hecho, la «comunidad internacional» se puso de parte de la ex junta y de quienes respaldaban entre la elite esta guerra, la cual prosigue contra una masa asombrosamente resistente de ciudadanos leales a Lavalas. Las fuerzas de la MINUSTAH no han hecho ningún esfuerzo por desarmar a los ex combatientes de las Forces Armées d’Haïti, la soldadesca que aterrorizó la isla durante las dictaduras militares de las décadas de 1980 y 1990 y organizó una insurgencia del estilo de la contra nicaragüense contra el gobierno de Aristide desde la vecina República Dominicana en 2001.

Por el contrario, se han reclutado elementos de las FAH para engrosar las filas de la PNH, tras un mínimo «examen de antecedentes», y se ha rehabilitado a notorios cabecillas de escuadrones de la muerte para encabezar ataques contra los seguidores de Lavalas con la aparente complicidad de las Naciones Unidas, cuyas tropas estaban presentes cuando la PNH abrió fuego contra manifestantes desarmados de Lavalas en el exterior del cuartel general de las fuerzas de la ONU en abril de 2005, matando a cinco manifestantes y dejando a otros cuatro mortalmente heridos. Las fuerzas de la MINUSTAH y la PNH mataron a unas veinticinco personas a comienzos de junio de 2005, y en julio realizaron una incursión conjunta en Cité Soleil que, según un equipo de la agencia Reuters, causó otros ocho muertos.

El gobierno provisional de Gérard Latortue, instalado por las fuerzas invasoras con el mandato básico de organizar unas elecciones, sigue todavía en funciones, sin haber sido elegido, dos años después. En enero de 2006 se pospusieron por cuarta vez las elecciones, argumentando que las tarjetas de registro de los votantes y los lugares de votación todavía no estaban «dispuestos», y esto pese a que durante los diez años anteriores a la ocupación de la ONU se habían celebrado elecciones legislativas y pre-

sidenciales de forma regular, y a que Aristide había proclamado su lealtad a la Constitución. Importantes dirigentes de Lavalas –incluido el ex primer ministro Yvon Neptune– han permanecido detenidos durante meses sin acusación; ha habido cientos de detenciones ilegales y sin garantías. El sacerdote de Lavalas Gérard Jean-Juste, eventual contendiente como candidato presidencial, permanece en prisión sin acusación formal desde el verano de 2005. Aunque se han recogido firmas para apoyarle en cualquier campaña electoral futura, su candidatura ha sido oficialmente rechazada, ya que no puede presentarse en persona. Amnistía Internacional lo ha declarado recientemente preso de conciencia.

Esta situación ha provocado un aumento de la tensión dentro de la propia MINUSTAH. Durante el verano de 2005 el comandante militar de la misión, el general brasileño Augusto Heleno Ribeiro Pereira, pidió ser relevado de su puesto al final de su mandato, dando a entender que le preocupaba la muerte de civiles que había tenido lugar y que no deseaba que lo hicieran responsable de «crímenes de guerra». Se ha informado de que los soldados brasileños no se mostraban muy contentos de tener que patrullar en barriadas no muy diferentes a las que habitan sus propias familias y ver morir a mujeres y niños desarmados. Con su sustituto, el general Urano Teixeira da Matta Bacellar, los soldados brasileños trataron de adoptar un papel más conciliador, por ejemplo con la apertura de una clínica en Cité Soleil. Pero el jefe civil de MINUSTAH, el ex ministro de Asuntos Exteriores chileno Juan Gabriel Valdés, se ha visto sometido a una creciente presión de las elites empresariales haitianas para que se reemprendiera la ofensiva. Como dijo Reginald Boulos a los oyentes de Radio Métropole el 5 de enero de 2006:

Esperamos que [Valdés] dé instrucciones claras a los soldados bajo su mando para limpiar de criminales Cité Soleil, como hicieron en Bel Air [...] No se puede hacer una tortilla sin cascar los huevos. Pensamos que los generales de la MINUSTAH tienen que hacer planes para limitar los daños colaterales, pero en el sector privado estamos dispuestos a crear un fondo de asistencia social para ayudar a todas las víctimas inocentes de la acción valerosa y necesaria que debe llevarse a cabo en Cité Soleil.

El 6 de enero el Consejo de Seguridad de la ONU sometió a discusión la situación en Haití. Al día siguiente el general Teixeira da Matta fue hallado muerto en su habitación del hotel; el análisis postmortem dejó establecido que se trataba de un suicidio. Según los informes de prensa, esto sucedió después de un acalorado debate con Valdés la noche anterior.

Al cabo de dos años, el evidente deterioro de la situación de seguridad y los derechos humanos bajo la vigilancia de la ONU precisa claramente alguna explicación. Lo que desean los patrocinadores de la MINUSTAH es el informe que, en primer lugar, presente al régimen de Aristide tan inhumanamente terrible que cualquier alternativa quede justificada, y en segundo lugar, que atribuya al propio Aristide todo lo que sucede en Haití, aunque permanezca exiliado en la lejana Sudáfrica.

Y a esa demanda responde precisamente *Notes from the Last Testament* de Michael Deibert, quien cubrió la desestabilización del gobierno de Aristide entre 2001 y 2003 para Reuters y el *Miami Herald*. Este extenso informe sobre los años de Aristide, con pocas notas (55 para un libro de 454 páginas) y al parecer no revisado (abundan las repeticiones y errores tipográficos), constituye un intento sustancial de proporcionar esa cobertura ideológica. Deibert no duda de lo justificado de la invasión:

Por las razones más elementales –el asesinato de civiles, las restricciones a la libertad personal y profesional, la subordinación de todas las instituciones estatales al capricho del poder ejecutivo, que despreciaba hasta la adhesión más somera a principales *[sic]* tan fundamentales como los derechos humanos y el respeto a la ley–, el gobierno de Aristide merecía ser derrocado como tantos otros en la historia haitiana.

Mientras que trata de pasar de puntillas por las hazañas de Latortue y sus patrocinadores extranjeros, Deibert señala claramente al principal culpable: «A Aristide todavía le quedaban cartas que jugar», escribe sobre un enfrentamiento acaecido el 7 de marzo de 2004, una semana después de la invasión, cuando el presidente depuesto iba de un aeropuerto africano a otro como un rehén virtual. Describe un asalto conjunto de la MINUSTAH y la PNH contra una manifestación de Lavalas en septiembre de 2004 como «una explosión de violencia de los partidarios de Aristide»; y reproduce acriticamente la afirmación no demostrada –y escasamente creíble– del gobierno de Latortue de que «el apoyo financiero y moral de Aristide a la rebelión desde Sudáfrica» era responsable de las muertes que se habían producido.

Notes from the Last Testament emplea las habituales técnicas literarias del corresponsal extranjero con pretensiones intelectuales. La narración es esencialmente experimental: nuestro hombre en Puerto Príncipe sale de su apartamento, acude a una manifestación, respira el ambiente, se topa con varias personas que mascullan amenazas contra Aristide y observa lo que sucede en el país. Unas pinceladas de color local –cielos azules, callejuelas atestadas, olores acres, alguna que otra expresión en *kreyol*, niños descalzos, música palpitante– se esfuerzan por dar vida a un lienzo prefabricado y que responde en todos los puntos clave a la argumentación oficial internacional. Una y otra vez, la frase que da sentido a un pasaje proviene de «un miembro del equipo de la Organización de Estados Americanos», «un veterano de misiones internacionales de observación», o un aparentemente ubicuo «funcionario estadounidense». Otras afirmaciones son atribuidas a fuentes aún más anónimas: «muchos decían», «la mayoría decía», «los críticos se sorprendían», «parecía», o simplemente a «rumores», algunos de los cuales eran «rumores inusualmente detallados». Media docena de entrevistas con destacados adversarios haitianos del gobierno de Lavalas –«Andy» Apaid, Evans Paul, Chavannes Jean-Baptiste, Hans Tippenhauer, Micha Gaillard, Pierre Esperance, de la Coalición Nacional por los Derechos Humanos y (en Manhattan) Michele Montas, viuda de Jean Dominique, el

locutor radical retratado en *The Agronomist*, de Jonathan Demme– llenan los huecos.

La narrativa experimental tiene la ventaja de evitar cualquier necesidad de evaluar las pruebas, contrapesar afirmaciones opuestas o aportar datos estadísticos (Chomsky, un fantasma particular de Deibert, es altaneramente despreciado por su «frenesí por los números»). En su lugar, Deibert recurre a lo que le cuentan en el bar de al lado, a fuentes anónimas de la OEA. Pasa a toda prisa por encima de la historia social y económica de Haití: los doscientos años desde Toussaint L'Ouverture hasta los Duvalier aparecen en cortas menciones, dispersas como miradas retrospectivas, en los primeros capítulos. De esa forma, al lector le puede resultar difícil distinguir las evasivas de los errores honestos, como cuando describe la indemnización de 150 millones de francos exigidos por Francia en 1825 en concepto de base para la restauración de las relaciones comerciales como «la suma que Haití se vio obligada a pagar al gobierno francés por el reconocimiento de su independencia». Esa suma constituía, en realidad, una compensación en efectivo por la pérdida de los antiguos esclavos de los franceses, que en la Declaración de Independencia de 1804 se habían proclamado libres. Para cumplir el acuerdo de 1825 y los términos comerciales paralizantes que lo acompañaban, el gobierno haitiano se vio obligado a pedir prestada a los bancos franceses una cantidad inicial de 24 millones de francos, con tipos de interés exorbitantes, abriendo así un periodo histórico de deuda estructural que se ha utilizado desde entonces como justificación para las intervenciones extranjeras.

Entre las más dañinas se cuenta la ocupación militar durante diecinueve años iniciada por Woodrow Wilson en 1915. Los estadounidenses rediseñaron las relaciones de propiedad en Haití para permitir la propiedad extranjera, expropiaron tierras para sus propias plantaciones y crearon un brutal ejército local que les hiciera el trabajo sucio y que continuó en el poder después de que las tropas estadounidenses abandonaran el país en 1934. Desde 1957 el terror que ejercía fue superado por el de los *tonton macoutes*, el ejército privado creado por François «Doc» Duvalier para proteger su propia dictadura frente a cualquier competencia de los generales. Las bandas florecieron entre la ulcerante pobreza supervisada desde la mansión presidencial por Papa Doc, y después de su muerte en 1971 por su hijo Baby Doc, ambos grandes amigos de Estados Unidos. Juntas militares asesinas prosiguieron la represión una vez que Baby Doc fue expulsado del poder en 1986 por la «avalancha» –que en *kreyol* se dice *lavalas*– de la insurgencia popular. Los asesinatos, con los cadáveres mutilados arrojados como advertencia en las calles y callejones, y los incendios de hogares e iglesias atestadas, eran instrumentos cotidianos del terror de la elite militar. Pobreza y brutalidad, reforzados por los señores feudales franceses y estadounidenses, han marcado durante generaciones la media isla hasta la primera presidencia de Aristide en 1991.

Cualquier evaluación objetiva del papel de Aristide debe partir, no de las desbordadas exageraciones de su poder ofrecidas por Deibert y el actual

gobierno «provisional» haitiano –o por sus más fervientes defensores–, sino de un reconocimiento de su debilidad. Aristide, uno de los muchos sacerdotes católicos que predicaba la teología de la liberación en su versión Lavalas en los barrios más pobres de Haití, resultó ser, como candidato presidencial, una opción muy popular para la oposición democrática en las primeras elecciones libres que se celebraron en Haití tras el derrocamiento de la dictadura militar en 1990, obteniendo una sorpresiva victoria en la primera vuelta sobre el ex funcionario del Banco Mundial Marc Bazin; pero tenía poca idea de qué hacer desde la presidencia, y ni las elites militares ni las económicas estaban dispuestas a tolerar a aquel advenedizo durante mucho tiempo. El general Cédras, que se hizo con el poder en septiembre de 1991, desencadenó una nueva oleada de terror contra los seguidores de Lavalas en los barrios. Los escuadrones de la muerte dirigidos por Louis Jodel Chamblain, Jean Tatoune y otros asesinaron a cientos de opositores. Aristide escapó a Washington. Las condiciones de la Administración de Clinton para apoyar su regreso a la presidencia lo ataron de pies y manos: se produjo un salvaje programa de ajuste estructural; se implantó un gobierno seleccionado por Washington y una amnistía total para la Junta; y el fin de su mandato presidencial tuvo lugar en 1995, como si hubiera cumplido la totalidad del mismo. Reinstalado por los marines estadounidenses, Aristide volvió a casa triunfante, pero prisionero en la práctica.

Las privatizaciones, y especialmente la reducción de las tarifas aduaneras agrícolas contemplada en el Plan de Ajuste Estructural, puestas en práctica de mala gana, devastaron la economía haitiana y lo malquistaron con sectores clave del apoyo a Lavalas. Como se había acordado, Aristide dejó la presidencia en 1995. Su sucesor, René Préval, que también pertenecía a Lavalas, obtuvo una fácil victoria en las elecciones de 1995, pero las tensiones políticas se incrementaron a medida que empeoraban las condiciones de vida. En 1994 Aristide había disuelto, pero no desarmado, a las fuerzas armadas, que inmediatamente comenzaron a reagruparse contra él, provocando una contramilitarización de algunos de los seguidores de Aristide. Las disputas sobre el programa económico rompieron la coalición Lavalas cuando el primer ministro Rosny Smarth –partidario del plan de ajuste estructural– y otros formaron la Organisation du Peuple en Lutte y Aristide promovió Fanmi Lavalas, un grupo personalista con una fuerte retórica a favor de los pobres. El trabajo parlamentario quedó bloqueado y la OPL disputó a FL las elecciones legislativas de 1997; en los barrios las rivalidades se manifestaban como enfrentamientos entre bandas. Prosiguieron los asesinatos de castigo, aunque a un nivel mucho más bajo que durante los años de la dictadura. Entre las víctimas sin sentido estuvo Jean Dominique, muerto, al parecer, por sus simpatías hacia los campesinos que protestaban contra la política de Lavalas, cuyos líderes se habían vinculado a la OPL.

Oficialmente, el punto álgido de la campaña contra Aristide debía coincidir con las elecciones legislativas de mayo de 2000: se alegaron irregularidades menores en el recuento de los votos para los partidos más peque-

ños, que no pudieron concurrir a una segunda vuelta de desempate, aunque ello habría tenido escaso impacto sobre el resultado general. Pero la narración de Deibert, poco más o menos cronológica a partir de 2000, deja inadvertidamente un cabo suelto: Convergence Démocratique –la alianza que agrupaba a los empresarios ricos, los duvalieristas, la OPL y los ex seguidores de Lavalas, que coordinó a partir de aquel momento la campaña en favor de una intervención estadounidense contra Aristide– denunció los resultados de las elecciones antes de que comenzara el recuento. No hubo grandes anomalías en éste, pero la clara perspectiva de que Aristide y sus seguidores barrerían legítimamente en las elecciones legislativas y presidenciales de aquel año, quedando en situación de poner en práctica la mínima redistribución de la riqueza que cabía deducir de la humilde promesa de Aristide de «sacar a la gente de la absoluta miseria para llevarla a una pobreza digna», fue el factor detonante.

Pese a lo que, según su propio informe, parece una gran familiaridad con los funcionarios estadounidenses que trabajan en el Caribe, Deibert nos dice muy poco de sus intervenciones reales: apenas medio párrafo se refiere, en términos muy generales, a la financiación desde el National Endowment for Democracy y la United States Agency for International Development (USAID). Los funcionarios haitianos de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (FISE), financiada por la USAID, ofrecieron mucha más información a los investigadores de derechos humanos en el informe de 2004 mencionado antes (compilado por Thomas Griffin para la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami). Esos funcionarios explicaron que la FISE desarrolló un programa de «sensibilización» en apoyo a la campaña contra el gobierno haitiano, que incluía la ayuda para crear y financiar grupos de estudiantes, en particular la Fédération des Etudiants Universitaires d'Haïti (FEUH) en la Universidad de Puerto Príncipe; asociaciones de empresarios del sector privado, como el grupo de los 184; grupos de periodistas y de los medios de comunicación, para «sensibilizar» a las emisoras de radio hacia el mensaje antigubernamental; y asociaciones de abogados, para «sensibilizar» al poder judicial. Según sus propios funcionarios, la FISE no sólo alquilaba salas de conferencias y sistemas de sonido para las reuniones de los grupos que financiaba, sino que les proporcionaba *catering*, alojamiento, entretenimiento y dietas diarias en efectivo para los que acudían a ellas. Entretanto, la Administración de Clinton interrumpió la línea de ayuda a Haití a pocas semanas de la primera conferencia de prensa de la Convergence en mayo de 2000; pocos meses más tarde siguió su ejemplo el Banco de Desarrollo Interamericano, cancelando créditos previamente acordados y sumergiendo al empobrecido Estado haitiano en una profunda crisis económica.

Todavía más nocivo fue que grupos paramilitares bajo el mando de Guy Philippe, Chamblain y otros comandantes de la era de la dictadura comenzaran a desencadenar operaciones desde la frontera con la República Dominicana. Deibert descarta como «teoría conspiratoria» la idea de que Estados Unidos proporcionara ninguna ayuda a los insurgentes con-

tra Aristide, desmentida por los anónimos «funcionarios estadounidenses sobre el terreno». Pero en otro lugar señala que «los funcionarios de la embajada estadounidense [...] contactaron con Guy Philippe mediante su teléfono móvil [...] y le convencieron para que retrasara cuarenta y ocho horas su planeado ataque a la capital haitiana». En una nueva revelación involuntaria de pruebas circunstanciales de la implicación estadounidense, Deibert menciona un informe periodístico dominicano de noviembre de 2002 según el cual Estados Unidos había proporcionado «20.000 fusiles de asalto M16 al ejército dominicano para ayudar al país a reforzar su frontera con Haití», y más tarde habla de la llegada a Gonaïves y otros lugares de los paramilitares procedentes de la República Dominicana, enarbolando «fusiles de asalto M16 relucientes», que según añade rápidamente habían sido «requisados en el puesto de policía de Gonaïves», aunque no aclara el misterio de cómo la policía estaba tan bien armada.

¿Hubo una «catástrofe de derechos humanos» bajo el gobierno de Aristide? Ésa fue la razón esgrimida por los medios occidentales para justificar el golpe contra él, y Deibert se esfuerza por corroborarlo. Las noticias de asesinatos –o «rumores» de que se habían producido– le llegan constantemente desde una fuente u otra mientras vagabundea por Puerto Príncipe; pero si sumamos el número real de muertes de las que informa entre 2001 y 2004 –cada una de ellas como consecuencia de un acontecimiento trágico y brutal–, llegamos a un total de 212. Los informes de Amnistía Internacional sugieren una cifra similar. Aunque se puede tratar de una grave subestimación, resulta instructiva una comparación con la Colombia de Uribe, donde los informes de Amnistía Internacional rondan las 3.000 muertes y 600 desapariciones por motivos políticos en 2003, para una población seis veces mayor: 42 millones, frente a los 8 millones de Haití.

Deibert debe así recurrir a las insinuaciones para reforzar su argumentación. Como cabía prever, Aristide aparece relacionado con los Duvalier (diez veces) y con Pol Pot, y un periódico progubernamental con el *Stürmer* de Streicher. La juventud pro Lavalas y la oposición a Convergence Démocratique y a los paramilitares son casi siempre mencionados en esas páginas como *chimères* –aunque Deibert nunca nos dice cómo distingue a un *chimère* de cualquier otro adolescente– y vinculadas siempre que es posible con innumbrables horrores del vudú. Las muertes reciben un tratamiento radicalmente diferente según sea la filiación política de la víctima. Así, el asesinato del periodista de oposición Brignol Lindor por miembros del Domi Nan Bwa (pro Lavalas) se describe con detalle en el prólogo y se repite en el capítulo 7: «No tuvieron compasión con él, y después de apuñalarlo, acuchillarlo y lincharlo, todo lo que quedó para la familia de Lindor fue recoger su destrozado cadáver». Por el contrario, el asesinato del juez de paz de Lavalas Christophe Lozama se describe en voz pasiva, como resultado de fuerzas naturales –«Lozama [...] fue muerto como consecuencia de un enfrentamiento entre seguidores de Lavalas y de Convergencia»– y queda más relativizado aún por la extraña observación de que «en los días posteriores, el gobierno y sus seguidores extranjeros convir-

tieron la muerte de Lozama en el gran problema, intentando desviar la atención de los ataques patrocinados por el gobierno contra los manifestantes y la prensa».

Las manifestaciones de protesta también reciben un tratamiento parcial. Deibert se muestra particularmente tierno hacia los estudiantes seguidores de Convergencia, y omite cualquier análisis de la financiación por la FISE de la FEUH de Puerto Príncipe. Una asamblea estudiantil en noviembre de 2002 –claramente un tumulto, en el que jóvenes ataviados con pañoletas con barras y estrellas asaltaron la casa del rector y luego treparon las puertas del Palacio Nacional gritando: «Aristide, asesino!»– se cifra en «miles» y se describe con términos nebulosos: «Fue quizá un pequeño paso, pero tras un verano de represión fue una victoria y eso era lo que los estudiantes necesitaban para seguir adelante». En cambio, Deibert no ofrece ninguna estimación del tamaño de la multitud que acudió a la convocatoria de Lavalas pocas semanas después, y sólo señala que «varios cientos» se unieron «a un grupo mucho mayor», en el que «un portavoz tras otro se dirigían a la multitud con [...] retórica contra los extranjeros». En resumen: «Buena puesta en escena [...] pensé».

Annette Auguste, la cantante y activista de Lavalas, conocida como *So* [sor, hermana] Anne, recibe un tratamiento especial. Aparece primero como una «antigua cantante folk que [...] hizo buenas migas» con Aristide; y luego, un centenar de páginas más adelante, como una «antigua cantante folk que [...] se había hundido en los más rancios recovecos político-criminales del entorno de Aristide». Describiendo un choque en diciembre de 2002 entre unos cientos de seguidores de Convergence Démocratique y una contramanifestación de «miles de *chimère*» en el exterior de la embajada estadounidense, Deibert nos dice ominosamente que «entre la turba estaba aquel día “*So Anne*” Auguste». Algunos de los manifestantes de Lavalas llevaban pequeñas fustas de cuero, y «uno de ellos» informó más tarde a Deibert de que *So Anne* había «bendecido» aquellos látigos en un ritual vudú antes de la manifestación». Durante otro choque entre estudiantes y seguidores de Lavalas un año después, Auguste, según Deibert, «fue vista inspeccionando el área en un automóvil». Las imputaciones culminan con la acusación, reproducida tal cual por Deibert, lanzada por el líder de una banda desde su exilio en Florida, de que *So Anne* había secuestrado a un niño en un hospital de Puerto Príncipe con el fin de asesinarlo en una ceremonia vudú para fortalecer a Aristide. Dada la amplitud de sus poderes sobrenaturales, puede ser un alivio para Deibert que la anciana Auguste permanezca en prisión sin acusación formal desde mayo de 2004.

Aunque su último capítulo recoja acontecimientos que llegan hasta principios del verano de 2005, Deibert trata de eludir cuestiones como el aplastamiento de la democracia y el deterioro de la situación social bajo el gobierno «provisional» de Latortue. El retraso indefinido de las elecciones es de hecho la solución perfecta para el principal problema político que señala Deibert: la necesidad de «desplazar el equilibrio de fuerzas fuera de

Puerto Príncipe, abarrotado como está de aspirantes a políticos y legiones de jóvenes pobres y desesperados». El problema de la hiperpolitización, particularmente entre los jóvenes pobres, fue percibido ya desde Nueva York. El informe de Kofi Annan en abril de 2004 advertía que (dijera lo que dijera al respecto la constitución haitiana) «la comunidad internacional [era] de la opinión de que se necesitaba más tiempo» antes de que se pudieran celebrar elecciones: «La vida política haitiana se ha visto dominada demasiado a menudo por elecciones presidenciales muy personalizadas». Propagar la democracia es una cuestión delicada; puede llevar años, décadas, o, como en el caso de Haití, siglos, antes de que un pueblo esté lo bastante despolitizado como para ejercerla.